



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

GERENCIA DEPARTAMENTAL
COLEGIADA DEL META

Secretaría común
80503 – S.C.
Villavicencio – Meta.

Contraloría General de la República :: SGD 18-12-2024 12:25
Al Contestar Cite Este No.: 2024EE0247744 Folio Anexo: 0 FA: 0
ORIGEN: 80503 GRUPO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE META / OIANA MARCELA ARISMENDY REY
DESTINO: JULIO CESAR ZULETA FUENTES
ASUNTO: NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO DEL AUTO NO. 0392, JULIO CESAR ZULETA
ORIS

2024EE0247744



SEÑOR(a):

JULIO CESAR ZULETA FUENTES

C.C. 79.524.894

jzuletaf@gmail.com

APODERADA

Sandra Lucia Eugenio Zarate

sandraluciaeugeniozarateslez@gmail.com

Asunto: Notificación por correo electrónico del **Auto No. 0392 del 15 de noviembre de 2024.**

Dentro del **PRF No. 80503-2017-28946.**

Contralor Provincial Ponente: Luis Eduardo Vallejo Araujo.

Abogado Sustanciador: Luis Alfonso Villalba Cruz.

En virtud a la previa autorización de notificación por correo electrónico de la presente providencia, me permito remitirle en archivo adjunto **Auto No. 0392 del 15 de noviembre de 2024 "AUTO DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL PRF DOBLE INSTANCIA No. 80503-2017-28946"**, adelantado en su contra por la Gerencia Departamental Colegiada del Meta de la Contraloría General de la República, Entidad Afectada **EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL.**

Se le hace saber que esta se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del correo electrónico que sea enviado. Para lo anterior, se tendrá en cuenta lo señalado en el artículo los términos de la Ley 1474 de 2011 artículo 116.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno. Así como También se corre traslado De conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 610 de 2000, surtida la notificación personal, se hace saber a cada uno de los presuntos responsables fiscales, al tercero civilmente responsable y a sus apoderados de confianza, que disponen de un término de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del presente Auto, para presentar los argumentos de defensa frente a la imputación efectuada, así como para solicitar y aportar las pruebas que pretendan hacer valer los cuales abran de ser radicados a cgr@contraloria.gov.co advirtiéndole que durante dicho término, el expediente permanecerá disponible en medios digitales y físico en la secretaria común de la Gerencia Departamental Colegiada del Meta.

Para efectos de radicación de recursos, oficios, solicitudes o cualquier otra comunicación referente al proceso, deberá enviarlo al correo cgr@contraloria.gov.co, con copia a luis.villalba@contraloria.gov.co con indicación de la Gerencia departamental competente, número del proceso, asunto, Contralor Provincial y abogado sustanciador que conoce del proceso. En caso de no realizarse a ese correo, no se responderá por la recepción del mensaje.

Nota: Por favor hacer caso omiso al oficio enviado con SIGEDOC 2024EE0233980, ya que en virtud a un error involuntario se referencio un numero de proceso errado.

Atentamente,

DIANA MARCELA ARISMENDY REY

Profesional Unversitaria G-02

Funcionaria asignada a Secretaría Común

Ordenó: Luis Alfonso Villalba.
Revisó: Diana Arismendy Rey
Elaboró y proyectó: Hernando Gonzalez Leon.
Anexo: Auto 0392 en (38) folios.

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S certifica que ha realizado por encargo de **Contraloría General de la República - Secretaría Comun GDC Meta** identificado(a) con NIT 899999067 el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Remitente - Destinatario. Acreditado por el organismo nacional de acreditación (ONAC) con el código 16-ECD-004.

Según lo consignado en los registros de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S el mensaje de datos presenta la siguiente información:

Resumen del mensaje

Id mensaje: 212491
Remitente: cntrRepua@cntrRepua.gov.co (sec.comun.meta@contraloria.gov.co)
Cuenta Remitente: correocertificadonotificaciones@4-72.com.co
Destinatario: sandraluciaeugeniozarateslez@gmail.com - sandraluciaeugeniozarateslez
Asunto: Notificación por correo electrónico del Auto No. 0392 del 15 de noviembre de 2024. JULIO CESAR ZULETA FUENTES.
Fecha envío: 2024-12-18 16:13
Documentos Adjuntos: Si
Estado actual: El destinatario abrió la notificación

Trazabilidad de notificación electrónica

Evento	Fecha Evento	Detalle
<p>● Estampa de tiempo al envío de la notificación</p> <p>El mensaje de datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo control del iniciador o de la persona que envió el mensaje de datos en nombre de éste - Artículo 23 Ley 527 de 1999.</p>	<p>Fecha: 2024/12/18 Hora: 16:16:24</p>	<p>Tiempo de firmado: Dec 18 21:16:24 2024 GMT Política: 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.9.</p>
<p>● Acuse de recibo</p> <p>Con la recepción del presente mensaje de datos en la bandeja de entrada del receptor, se entiende que el destinatario ha sido notificado para todos los efectos legales de acuerdo con las normas aplicables vigentes, especialmente el Artículo 24 de la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias.</p>	<p>Fecha: 2024/12/18 Hora: 16:16:25</p>	<p>Dec 18 16:16:25 c1-t205-282c1 postfix/smtp[30994]: 2EB121248786: to=<sandraluciaeugeniozarateslez@gmail.com>, relay=gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.197.26]:25, delay=1.4, delays=0.16/0.48/0.73, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK 173455658541be03b00d2f7-801d5bf980si11380282a12.270 - gsmtpl)</p>
<p>● El destinatario abrió la notificación</p>	<p>Fecha: 2024/12/18 Hora: 16:17:56</p>	<p>Dirección IP: 172.226.172.7 Agente de usuario: Mozilla/5.0</p>

De acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley 527 de 1999 se presumirá que el destinatario ha recibido el mensaje, cuando el emisor del mismo recepcione el acuse de recibo que puede ser automatizado, en ese orden de ideas, el presente documento constituye acuse de recibo automatizado y constituye prueba de entrega del mensaje de correo electrónico así como sus archivos adjuntos en la fecha y hora indicadas anteriormente.

Importante: En el aparte Acuse de Recibo, en los casos en que aparece la frase "Queued mail for delivery" se debe a las características del servidor de correo electrónico Microsoft Exchange, en estos casos, si el mensaje no pudo ser entregado dicho servidor enviará una segunda respuesta indicando que no fue exitosa la entrega del mensaje, si no hay una segunda respuesta del servidor de correo electrónico, quiere decir que tu mensaje fue entregado satisfactoriamente por lo que este documento pasa a constituir acuse de recibo

✉ Contenido del Mensaje

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S certifica que ha realizado por encargo de **Contraloría General de la República - Secretaría Comun GDC Meta** identificado(a) con NIT 899999067 el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Remitente - Destinatario. Acreditado por el organismo nacional de acreditación (ONAC) con el código 16-ECD-004.

Según lo consignado en los registros de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S el mensaje de datos presenta la siguiente información:

Resumen del mensaje

Id mensaje: 212493
Remitente: cntrRepua@cntrRepua.gov.co (sec.comun.meta@contraloria.gov.co)
Cuenta Remitente: correocertificadonotificaciones@4-72.com.co
Destinatario: jzuletaf@gmail.com - jzuletaf
Asunto: Notificación por correo electrónico del Auto No. 0392 del 15 de noviembre de 2024. JULIO CESAR ZULETA FUENTES.
Fecha envío: 2024-12-18 16:13
Documentos Adjuntos: Si
Estado actual: Acuse de recibo

Trazabilidad de notificación electrónica

Evento	Fecha Evento	Detalle
<ul style="list-style-type: none">● Estampa de tiempo al envío de la notificación El mensaje de datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo control del iniciador o de la persona que envió el mensaje de datos en nombre de éste - Artículo 23 Ley 527 de 1999.	Fecha: 2024/12/18 Hora: 16:16:21	Tiempo de firmado: Dec 18 21:16:21 2024 GMT Política: 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.9.
<ul style="list-style-type: none">● Acuse de recibo Con la recepción del presente mensaje de datos en la bandeja de entrada del receptor, se entiende que el destinatario ha sido notificado para todos los efectos legales de acuerdo con las normas aplicables vigentes, especialmente el Artículo 24 de la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias.	Fecha: 2024/12/18 Hora: 16:16:22	Dec 18 16:16:22 cl-t205-282cl postfix/smtp[4474]: 31E0F12487B0: to=<jzuletaf@gmail.com>, relay=gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.197.26]:25, delay=1.4, delays=0.16/0/0.48/0.73, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK 1734556582 41bc03b00d2f7-801d5c2beb7si11418485a12.3 97 - gsmtpl)

De acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley 527 de 1999 se presumirá que el destinatario ha recibido el mensaje, cuando el emisor del mismo recepcione el acuse de recibo que puede ser automatizado, en ese orden de ideas, el presente documento constituye acuse de recibo automatizado y constituye prueba de entrega del mensaje de correo electrónico así como sus archivos adjuntos en la fecha y hora indicadas anteriormente.

Importante: En el aparte Acuse de Recibo, en los casos en que aparece la frase "Queued mail for delivery" se debe a las características del servidor de correo electrónico Microsoft Exchange, en estos casos, si el mensaje no pudo ser entregado dicho servidor enviará una segunda respuesta indicando que no fue exitosa la entrega del mensaje, si no hay una segunda respuesta del servidor de correo electrónico, quiere decir que tu mensaje fue entregado satisfactoriamente por lo que este documento pasa a constituir acuse de recibo

✉ Contenido del Mensaje

Asunto: Notificación por correo electrónico del Auto No. 0392 del 15 de noviembre de 2024. JULIO CESAR ZULETA FUENTES.



Outlook

OK

(Sin asunto)

Desde Sandra Eugenio <sandraluciaeugeniozarateslez@gmail.com>

Fecha Mié 18/12/2024 4:23 PM

Para CGR DGD 2024 (CGR) <cgrdgd@contraloria.gov.co>; Diana Marcela Arismendy Rey (CGR) <diana.arismendy@contraloria.gov.co>; Luis Alfonso Villalba Cruz (CGR) <luis.villalba@contraloria.gov.co>

Villavicencio-Meta, 18 de diciembre de 2024

Doctor

Luis Eduardo Vallejo Araujo
Contralor Provincial Ponente
Gerencia Colegiada del Meta
Contraloría general de la República

Doctor

Luis Villalba
Abogado de la gerencia colegiada del Meta

Asunto: solicitud del expediente del PRF No. 80503-2017-28946.

Sandra Lucía Eugenio Zárate, en mi calidad de apoderada del señor Julio César Zuleta Fuentes, por medio del presente correo me permito solicitar copia del Expediente digital con el fin de realizar la defensa del investigado atendiendo al auto de imputación que le fue formulado por su despacho y me fue notificado el día de hoy vía correo electrónico.

Atentamente,

SANDRA LUCÍA EUGENIO ZARATE

Abogada Consultora

NOTA CONFIDENCIAL

La información contenida en este correo es confidencial, y solo puede ser utilizada por la persona o la compañía a la que se dirige. La información que no sea de carácter oficial y que se tramite por

Luis Alfonso Villalba Cruz (CGR) ha compartido la carpeta "2017-28946" contigo

Desde Luis Alfonso Villalba Cruz (CGR) <luis.villalba@contraloria.gov.co>

Fecha Jue 19/12/2024 10:40 AM

Para sandraluciaeugeniozarateslez@gmail.com <sandraluciaeugeniozarateslez@gmail.com>

CCO INVITACION A USUARIO EXTERNOS <invitacionausuarioexternos@contraloria.gov.co>



Luis Alfonso Villalba Cruz (CGR) compartió una carpeta contigo

Buenos días, Doctora Sandra Lucia;
conforme su solicitud, estoy compartiendo por ONEDRIVE, copia del
expediente PRF 80503-2017-28946.

2017-28946



Este vínculo solo funciona para los destinatarios directos de este mensaje.

Ver

2024ER0288391

3-01-2025

LEZ ABOGADOS

772

Villavicencio, Meta, Enero de 2025

Doctor

LUIS EDUARDO VALLEJO ARAUJO

Contralor provincial

Gerencia Colegiada del Meta

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

E.

S.

D.

REFERENCIA: PROCESO SANCIONATORIO
DE RESPONSABILIDAD FISCAL

INVESTIGADO: JULIO CESAR ZULETA
FUENTES

PROCESO: 80503-2017-28946

SANDRA LUCIA EUGENIO ZARATE mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.192.345 expedida en Bogotá y portadora de la tarjeta profesional 110.671 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, obrando en el presente tramite como apoderada del investigado **JULIO CESAR ZULETA FUENTES**, quien se encuentra vinculado en el proceso de la referencia, actuando dentro de la oportunidad procedo a rendir los argumentos para la defensa del investigado a mi cargo por medio del presente escrito, los cuales tienen como finalidad desligar al investigado de la imputación de responsabilidad que atribuyo su despacho con fundamento en las siguientes consideraciones.

I. ARGUMENTOS DE LA DEFENSA.

Los argumentos para la defensa, tendientes a desvirtuar la imputación que realizo el señor Contralor provincial ponente mediante el auto 392 de 2024 donde endilgo la responsabilidad fiscal por el valor DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS (288.711.714) y califico que la conducta de mi defendido el señor ZULETA FUENTES a titulo de CULPA GRAVE, como se logra vislumbra en el mencionado auto.

Por lo anterior, se procederá a exponer como se va desarrollar el presente escrito, en primer lugar se va analizar la naturaleza y alcance del proceso de responsabilidad fiscal y para finalizar se estudiarán los elementos que dan origen al caso y su configuración.

Se debe indicar que, los elementos de la responsabilidad fiscal tienen sustento normativo en el artículo 5 de la ley 610 de 2000:

“ARTICULO 5o. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL. <Artículo modificado por el artículo 125 del Decreto Ley 403 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos:

- *Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya directa o indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado.*
- *Un daño patrimonial al Estado.*
- *Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.”*

De la normativa fiscal se puede concluir que los elementos que componen la responsabilidad fiscal son el daño patrimonial al estado, la conducta dolosa o gravemente culposa de la persona que realiza la gestión fiscal o concurra, participe, incida o contribuya directa o indirectamente en la producción del daño patrimonial al estado y el nexo de causalidad entre daño y la conducta del gestor fiscal.

2.1. NATURALEZA Y ALCANCE DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Para explicar la naturaleza y alcance de proceso de responsabilidad fiscal, hay que remitirse al artículo primero de la ley 610 de 2000, que dispone lo siguiente:

“ARTICULO 1o. DEFINICION. <Ver Notas de Vigencia> <Aparte subrayado **CONDICIONALMENTE** exequible> El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta,

causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.”¹

Del supuesto normativo antes reseñado, se logra extraer que el proceso de responsabilidad fiscal es de naturaleza administrativa, orientado a determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares en el ejercicio de la gestión fiscal que con su comportamiento causen un daño al patrimonio estatal, por lo tanto, el proceso fiscal busca la reparación del patrimonio estatal.

Lo anterior ha sido desarrollado y complementado por la honorable Corte Constitucional, en los siguientes términos:

En la sentencia SU.620-1996

“El proceso de responsabilidad fiscal, atendiendo su naturaleza jurídica y los objetivos que persigue, presenta las siguientes características:

A. Es un proceso administrativo, en razón de su propia materia, como es el establecimiento de la responsabilidad que corresponde a los servidores públicos o a los particulares que ejercen funciones públicas, por el manejo irregular de bienes o recursos públicos. Su conocimiento y trámite corresponde a autoridades administrativas,(...)

B. La responsabilidad que se declara es esencialmente administrativa, porque juzga la conducta de un servidor público, o de una persona que ejerce funciones públicas, por el incumplimiento de los deberes que les incumben, o por estar incurso en conductas prohibidas o irregulares que afectan el manejo de los bienes o recursos públicos y lesionan, por consiguiente, el patrimonio estatal.

(...)

C. Dicha responsabilidad no tiene un carácter sancionatorio. (...) la declaración de responsabilidad tiene una finalidad meramente resarcitoria, pues busca obtener la indemnización por el detrimento patrimonial ocasionado a la entidad estatal. Es, por lo tanto, una responsabilidad independiente y autónoma, distinta de la disciplinaria o de la penal que pueda corresponder por la comisión de los mismos hechos. En tal virtud, puede existir una acumulación de responsabilidades, con las disciplinarias y penales, aunque se advierte que si se percibe la indemnización de perjuicios dentro del proceso penal, no es procedente al mismo tiempo obtener un

¹ Artículo 1 de ley 610 de 2000.

nuevo reconocimiento de ellos a través de dicho proceso, como lo sostuvo la Corte en la sentencia C-046/94^[3].

D. En el proceso de responsabilidad fiscal se deben observar las garantías sustanciales y procesales que informan el debido proceso, debidamente compatibilizadas con las reglas de orden constitucional y legal²(Negrilla fuera del texto original)

Así mismo esta posición frente al proceso de responsabilidad fiscal, ha sido reiterada y complementada, por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia T-738 de 2014, así:

" (...) el proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa, un daño al patrimonio del Estado. Como lo tiene establecido la jurisprudencia de esta Corporación, se trata de un proceso de naturaleza administrativa pues recae sobre la responsabilidad de servidores públicos o de particulares vinculados a la gestión fiscal y su conocimiento le corresponde a autoridades administrativas; la responsabilidad que en él se declara es esencialmente administrativa y patrimonial ya que juzga el incumplimiento de deberes funcionales y conmina a la reparación del daño causado al Estado y no tiene un carácter sancionatorio ni penal ni administrativo sino estrictamente resarcitorio.

(....)

Por su parte, la Ley 610 de 2010 (sic) "Por medio de la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías", establece en su artículo 1° que la responsabilidad fiscal es "el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado"

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de esta normativa, dentro de los principios orientadores del proceso de responsabilidad fiscal se encuentran el debido proceso (artículo 29 Superior), los principios de la

² Corte Constitucional, Sentencia SU. 620- 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

función administrativa (artículo 209 Constitucional), y los principios consagrados en el Código Contencioso Administrativo.”³

Tal como se expuso en líneas anteriores, la naturaleza del proceso de responsabilidad fiscal es administrativa y su finalidad es la reparación del patrimonio estatal, es un proceso que debe estar orientado al derecho fundamental al debido proceso, las garantías sustanciales y procedimentales que lo delimitan, donde como requisito fundamental la carta política en su artículo 29 exige un principio de tipicidad, para sancionar por parte de las autoridades, que se transcribe:

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.”⁴

Situación que en materia fiscal que se concretiza en la ley 610 de 2000 en los artículos 1 “definición” y artículo 5 “elementos de la responsabilidad fiscal”, punto que será desarrollado a plenitud en el siguiente aparte del escrito, por lo que en este momento es preciso indicar que si no se logran acreditar los tres elementos de la responsabilidad fiscal (Daño o perjuicio, Conducta dolosa o gravemente culposa y nexo causal entre el daño y la conducta), en forma clara, precisa y certera, por parte del despacho, no habría lugar a una imputación o declaración de responsabilidad fiscal y como consecuencia de esto, debe procederse al cese de la acción fiscal, por parte del despacho.

Por lo anterior, procedo a exponer los argumentos tendientes a explicar los elementos de la responsabilidad fiscal y demostrar que no están acreditados en caso concreto del PRF-083-2019.

2.2. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL Y SU CONFIGURACION EN EL CASO CONCRETO.

A. EL DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO.

³ Corte Constitucional, Sentencia T-738- 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

⁴ Constitución Política de Colombia, Artículo 29.

El daño patrimonial al Estado es uno de los tres elementos que configuran la responsabilidad fiscal en el ordenamiento jurídico, y le corresponde al despacho determinar y probar la materialización del mismo.

El concepto de daño en materia fiscal encuentra sustento, en la normativa fiscal, en el artículo 6 que preceptúa lo siguiente:

“ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Artículo modificado por el artículo 126 del Decreto Ley 403 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción de este.”

Del artículo precedente, se extraen los siguientes puntos a tener en consideración, el daño ha de entenderse como una lesión al patrimonio público, que se representa en la disminución, menoscabo, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, el sujeto que genere el daño tiene que estar ejerciendo gestión fiscal y su comportamiento ha de ser doloso o gravemente culposos.

Es de anotar que el concepto de daño no es un concepto indeterminado por el contrario requiere una serie de elementos que la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha establecido así:

“(…) es indispensable que se tenga una certeza absoluta con respecto a la existencia del daño patrimonial, por lo tanto es necesario que la lesión patrimonial se haya ocasionado realmente, esto es, que se trate de un daño existente, específico y objetivamente verificable, determinado o determinable”⁵

⁵ Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 16 de marzo de 2017, radicación 68001-23-31-000-2010-00706-01, CP. María Elizabeth García González.

Del criterio jurisprudencial se desprende que el daño no puede ser cualquier daño, sino que ha de ser un daño cierto que excluya la posibilidad de la expectativa, como lo ha indicado la doctrina en materia de responsabilidad fiscal.

“(…) daño es la certeza, que tuvo lugar y por ende, causó una acción lesiva a los intereses patrimoniales del estado. (...) excluyendo la posibilidad, la simple expectativa, la eventualidad de ocurrencia.

(...) se habla de un perjuicio incierto aludiendo a los daños cuya existencia no está del todo establecida, pudiéndose plantear dudas acerca de su realidad.”⁶

Es así como de la certeza, se deriva que el daño ha de ser presente, porque si es condicionado al futuro, habría lugar a interrogantes de su existencia, como lo ha expresado la Contraloría General de la República en el concepto 80112 EE15354, que recordó el estudio del daño realizado por la entidad en el Concepto 0070A del 15 de enero de 2001.

“(…)el daño cierto puede ser pasado — ocurrió— o futuro — a suceder— En principio el daño pasado no es tan problemático puesto que ya existe, el problema que se presenta generalmente es el de cuantificarlo. En cambio el daño futuro presenta muchas más aristas que son problemáticas. Estudiemos primero la cuestión relativa a los daños futuros para luego entrar en los pasados.

Frente a los daños futuros la jurisprudencia y la doctrina — colombiana como extranjera— son claras en establecer que este puede considerarse como cierto siempre y cuando las reglas de la experiencia y de la probabilidad indiquen que este habrá de producirse. Esta certeza por supuesto no es absoluta pues sobre el futuro no puede predicarse una certeza absoluta. Lo importante es que existan los suficientes elementos de juicio que permitan establecer que el daño muy seguramente se producirá. El daño futuro cierto — denominado como virtual— se opone al daño futuro hipotético que es aquel sobre el cual simplemente existe alguna posibilidad de que se produzca pero las reglas de la experiencia y de la probabilidad indican que puede o no producirse.

Establecer los alcances del daño futuro en materia de responsabilidad fiscal sería un ejercicio académico interesante, sin embargo por ahora nos basta decir que de acuerdo con la normatividad actual a la responsabilidad fiscal sólo importan los daños pasados. No puede derivarse responsabilidad fiscal sobre daños futuros. A esta conclusión tajante se puede llegar sin necesidad de mucho análisis puesto que la ley dispone que para aperturar el proceso

⁶ Duque Botero Luz Jimena y Fredy Céspedes Villa, El control y la responsabilidad fiscales: fundamentos sobre la vigilancia de la gestión fiscal, el proceso ordinario y el proceso verbal de responsabilidad fiscal, Editorial Ibáñez, 2018, página 353.

de responsabilidad fiscal se requiere que «se encuentre establecida la existencia de un daño patrimonial al Estado». Igualmente para proferir el fallo con responsabilidad fiscal es necesario que «obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio público.

De esta forma la ley exige que cuando vaya a iniciarse un proceso un proceso de responsabilidad el daño exista, es decir, ya se haya consumado o producido. Creemos que esta disposición es sana puesto que la certeza en el daño futuro es una certeza relativa. Sobre el futuro es imposible tener certeza absoluta puesto que siempre existe un margen de error en las predicciones. Esto podría entonces acarrear injusticias al atribuir responsabilidad fiscal a alguien — tendría que acarrear con las graves consecuencias que ello implica— sobre un daño que finalmente no se produjera. En este caso se presentaría un enriquecimiento sin causa por parte del Estado y el ciudadano podría demandar para que le reembolsaran lo pagado.”⁷

De lo anterior se concluye que no puede haber un proceso de responsabilidad fiscal, que endilgue responsabilidad con un daño originado al futuro, por la complejidad de establecerlo y las implicaciones que conllevaría, frente al presunto responsable fiscal.

Como otro aspecto relevante del daño en materia fiscal, es que no toda actuación del servidor público o el particular, que haya generado un daño, implica el nacimiento de la responsabilidad fiscal, sino por el contrario tiene que ser una actividad propia de la gestión fiscal que ejerce el particular o servidor público, como bien lo indica la normativa fiscal en los artículos 1 “definición”, 4 “objeto de la responsabilidad fiscal”, 5 “elementos de la responsabilidad” y 6 “Daño patrimonial al estado”, al punto tal, que si la calidad de gestor fiscal del investigado no se logra demostrar o se desvirtúa, habría lugar a que la acción fiscal feneciera, por ser el eje central del proceso de responsabilidad fiscal.

Situación que se corrobora en las atribuciones que le otorgo el constituyente a la Contraloría General de la Republica plasmadas en la carta política de 1991 expresamente en los articulo 267 y 268.5.

“ARTICULO 267 (...) la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos (...)”⁸

⁷ Oficina Jurídica de la Contraloría General de la Republica, Concepto 80112 EE15354 del 13 de Marzo de 2006.

⁸ Constitución Política de Colombia, Artículo 267

“ARTICULO 268. <Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 4 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones:

(...)

Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, (...)⁹

Como se puede observar la gestión fiscal, es tan importante que la constitución le adscribió a esta categoría las facultades de la contraloría, en gran parte y es por esa condición que el mismo legislador en el artículo 3 de ley 610 de 2000, la definió en los siguientes términos:

“ARTICULO 3o. GESTION FISCAL. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.”¹⁰

De la anterior disposición normativa, se puede resaltar que la gestión fiscal es el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan las personas de derecho privado o los servidores públicos que manejen o administren los recursos o fondos públicos, por lo tanto quien no tiene esa calidad de administrador o director del recurso público no pueden ser gestores fiscales.

Esta posición ha sido reafirmada por la jurisprudencia del Consejo de Estado, en la siguiente forma.

“Al amparo de la nueva concepción que sobre control fiscal incorpora la Constitución de 1991, la ley 610 de 2000 prescribe en su artículo 3 la noción de gestión fiscal... Como bien se aprecia, se trata de una definición que comprende las actividades económicas, jurídicas y tecnológicas como universo posible para la acción de quienes tienen la competencia o capacidad para realizar uno o más de los verbos asociados al tráfico económico de los recursos y bienes públicos, en orden a cumplir los fines esenciales del Estado conforme a unos principios que militan como basamento, prosecución y sentido teleológico de las respectivas

⁹ Constitución Política de Colombia, Artículo 268.5

¹⁰ Ley 610 de 2000, Artículo 3.

atribuciones y facultades. Escenario dentro del cual discurren, entre otros, el ordenador del gasto, el jefe de planeación, el jefe jurídico, el almacenista, el jefe de presupuesto, el pagador o tesorero, el responsable de la caja menor, y por supuesto, los particulares que tengan capacidad decisoria frente a los fondos o bienes del erario público puestos a su cargo. Siendo patente que en la medida en que los particulares asuman el manejo de tales fondos o bienes, deben someterse a esos principios que de ordinario son predicables de los servidores públicos, a tiempo que contribuyen directa o indirectamente en la concreción de los fines del Estado.

Por lo tanto, cuando alguna contraloría del país decide crear y aplicar un programa de control fiscal en una entidad determinada, debe actuar con criterio selectivo frente a los servidores públicos a vigilar, esto es, **tiene que identificar puntualmente a quienes ejercen gestión fiscal dentro de la entidad, dejando al margen de su órbita controladora a todos los demás servidores**. Lo cual es indicativo de que el control fiscal no se puede practicar in sólido o con criterio universal, tanto desde el punto de vista de los actos a examinar, como desde la óptica de los servidores públicos vinculados al respectivo ente. Circunstancia por demás importante si se tienen en cuenta las varias modalidades de asociación económica que suele asumir el Estado con los particulares en la fronda de la descentralización por servicios nacional y/o territorial. **Eventos en los cuales la actividad fiscalizadora podrá encontrarse con empleados públicos, trabajadores oficiales o empleados particulares, sin que para nada importe su específica condición cuando quiera que los mismos tengan adscripciones de gestión fiscal dentro de las correspondientes entidades o empresas.**

Bajo tales connotaciones resulta propio inferir que la esfera de la gestión fiscal constituye el elemento vinculante y determinante de las responsabilidades inherentes al manejo de fondos y bienes del Estado por parte de los servidores públicos y de los particulares. Siendo por tanto indiferente la condición pública o privada del respectivo responsable, cuando de establecer responsabilidades fiscales se trata.¹¹

Del criterio jurisprudencial, se deduce que la Gestión Fiscal es la capacidad o competencia atribuida a unos determinados sujetos, para el manejo y decisión de los recursos y bienes estatales, de forma efectiva, solo cuando este sujeto tiene

¹¹ Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación 25000-23-41-000-2014-00058-01, CP. María Elizabeth García González.

esas condiciones se puede hablar del daño en materia fiscal y le será atribuible, la modalidad de responsabilidad aquí descrita.

Sabiéndose lo anterior que para que se logre endilgar responsabilidad fiscal al investigado ZULETA FUENTES le deben confluír en primer lugar un daño patrimonial al estado y que este tuviese la calidad de gestor fiscal.

Condición que hace referencia al manejo u administración de recursos o fondos públicos, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales, por lo tanto quien no tiene esa calidad de administrador o director del recurso público no pueden ser gestores fiscales.

Tal como ordena la normativa que regula el proceso de responsabilidad fiscal, en el presente caso tenemos que el investigado no era el ADMINISTRADOR DEL MENCIONADO CONVENIO, sino por el contrario era un GESTOR TECNICO, el cual tenía como funciones relevantes para el caso que nos convoca.

1. El reporte de acciones al administrador para evitar situaciones gravosas.
2. Llevar a cabo el control del uso de los recursos entregados al contratista, en caso de observar inconsistencias debe informar al administrador quien tiene la facultad correctiva y sancionatoria al contratista.
3. Verificar el cumplimiento de normas aplicables al convenio para su buen desarrollo.
4. Hacer recomendaciones.

De lo antes reseñado, tenemos que las funciones del señor investigado ZULETA FUENTES, tienen una condición meramente de seguimiento, pero no de administración, pues las mismas solo refieren a que verifique la marca del objeto contractual lo que implica una función meramente de apoyo, mas no de dirección y manejo del recurso, porque este no podía sancionar y aplicar los correctivos, únicamente podía informar al administrador quien si podía aplicar correctivos y sanciones para enderezar el convenio, preservar el recurso publico y llevar a feliz término el convenio.

De manera que el señor ZULETA FUENTES, no tenía la calidad de gestor fiscal, porque sus funciones eran meramente de apoyo mas no de dirección y manejo del recurso, por el hecho de que no controlaba el recurso público, sus decisiones en marco del convenio eran procedimentales mas no definitivas, al punto tal que las mismas solo eran de alerta al administrador, quien realmente evaluaba la situación y tomaba las acciones pertinentes.

Implicando así que no pudiese endilgársele la calidad de gestor fiscal y con ello que el daño patrimonial al estado le pueda ser atribuido, pues la normativa fiscal que regula el tema indica claramente que la persona que realiza el daño lo hace en la modalidad de culpa o dolo en ejercicio de la condición de gestor fiscal por el hecho de que no administra los recursos, lo que este realizaba era una actividad meramente de apoyo.

Porque la administración implica la condición, dirección, mando y organización, donde las funciones del investigado no encajan en ninguno de los verbos antes descritos, pues debía realizar seguimiento pero no dirección y orden al contratista. Lo que se demuestra en las mismas funciones de la guía.

Además el visto bueno de JULIO ZULETA en el acto que ordeno el desembolso, no era relevante para la entrega del recurso, pues el que era vinculante era el del administrador que en el presente caso no era JULIO ZULETA, sino GONZALO MURILLO ESCOBAR, quien debía hacer las funciones de dirección y mando del convenio y del recurso.

B. CONDUCTA DOLOSA O GRAVENTE CULPOSA DEL GESTOR FISCAL.

El siguiente elemento por definir es la conducta dolosa o gravemente culposa del gestor fiscal, que como lo indica la ley 610 de 2000, en su artículo 5 "elementos de la responsabilidad fiscal".

"ARTICULO 5o. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL. <Artículo modificado por el artículo 125 del Decreto Ley 403 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos:

- Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya directa o indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado "¹²

Se encuentra que la normativa fiscal, consagro que la conducta del sujeto ha de ser en ejercicio de la gestión fiscal y ha de ser analizada en términos de culpabilidad restringida, porque la norma solo consagro la modalidad Dolosa o gravemente culposa.

Para ilustrar lo antes dicho, la doctrina ha entendido lo siguiente:

"el segundo elemento de la responsabilidad fiscal es la conducta, que debe ser analizada desde dos perspectivas: la primera, orientada a profundizar sobre " la Gestión Fiscal" como uno de los presupuestos indispensables de la responsabilidad fiscal, en tanto solo podremos exigir el resarcimiento de los daños causados. Si, en un primer momento, la conducta que dio origen al menoscabo patrimonial fue desplegada por un gestor fiscal. La segunda, implica un análisis de la culpabilidad, pues para que pueda endilgarse responsabilidad

¹² Ley 610 de 2000, Artículo 5.

fiscal a un sujeto determinado, se requiere que dicha conducta del gestor fiscal, haya sido realizada a título de dolo o culpa grave.”¹³

En ese orden de ideas será necesario hablar en primer lugar que la conducta ha de ser desplegada por el gestor fiscal, trayendo como consecuencia que el funcionario o particular, tenga en cabeza suya la titularidad de la gestión fiscal, entendida como las atribuciones de administración o manejo de los recursos públicos conferidos por el estado por mandato legal, constitucional, reglamentario, estatutario o contractual.

Por lo tanto si el sujeto realiza una conducta, careciendo de la titularidad jurídica de gestor fiscal, no será responsable fiscal, argumento que fue recogido por la corte constitucional en sentencia C-840 de 2001.

“La responsabilidad fiscal únicamente se puede pregonar respecto de los servidores públicos y particulares que estén jurídicamente habilitados para ejercer gestión fiscal, es decir, que tengan poder decisorio sobre fondos o bienes del Estado puestos a su disposición. Advirtiéndose que esa especial responsabilidad está referida exclusivamente a los fondos o bienes públicos que hallándose bajo el radio de acción del titular de la gestión fiscal, sufran detrimento en la forma y condiciones prescritos por la ley. Lo cual implica que si una persona que ejerce gestión fiscal respecto de unos bienes o rentas estatales, causa daño a ciertos haberes públicos que no se hallan a su cargo, el proceso a seguirle no será el de responsabilidad fiscal, pues como bien se sabe, para que este proceso pueda darse en cabeza de un servidor público o de un particular, necesaria es la existencia de un vínculo jurídico entre alguno de éstos y unos bienes o fondos específicamente definidos. Es decir, la gestión fiscal está ligada siempre a unos bienes o fondos estatales inequívocamente estipulados bajo la titularidad administrativa o dispositiva de un servidor público o de un particular, concretamente identificados.”¹⁴

Conociendo que la conducta solo puede ser desplegada por un gestor fiscal, con las consideraciones ya expuestas, se debe analizar, que la conducta solo será reprochable jurídicamente, si su comisión fue a título de Dolo o Culpa Grave, para mejor comprensión de estos conceptos, es necesario remitirnos a lo que indico la corte constitucional en la sentencia C-840 de 2001.

¹³ Duque Botero Luz Jimena y Fredy Céspedes Villa, El control y la responsabilidad fiscales: fundamentos sobre la vigilancia de la gestión fiscal, el proceso ordinario y el proceso verbal de responsabilidad fiscal, Editorial Ibáñez, 2018, pagina 381.

¹⁴ Corte Constitucional, Sentencia C-840 de 2001, MP. Jaime Araujo Rentería.

"El dolo, según Enneccerus: "Es el querer un resultado contrario a derecho con la conciencia de infringirse el derecho o un deber".

Según el Diccionario Jurídico Espasa, el dolo: "Es la forma más grave de la culpabilidad. Suele definirse como conocimiento y voluntad de un resultado típico. Actúa dolosamente quien: 1º. Conoce los elementos esenciales del tipo del injusto; sabe, por ejemplo que la cosa es ajena. Además de saber que la acción que se propone está prohibida por la ley penal, (...). 2º. Quiere esa acción y su resultado. Se resuelve a ejecutar aquello que sabe está prohibido. Por tanto, el dolo tiene dos elementos: el intelectual (conocimiento) y el volitivo (voluntad), referidos a un resultado típico, es decir, prohibido por la ley penal. Caben varias clasificaciones del dolo, pero la más importante distingue entre dolo directo, que comprende aquellos casos en que el autor quiere intencionalmente el resultado representado en su mente, y es el más frecuente, y dolo eventual, referido a aquellos supuestos en que el agente se representa como probable la producción del resultado y, aunque no lo quiere directamente, acepta la probabilidad de que acontezca".

Con respecto a la culpa el artículo 63 del Código Civil prevé tres modalidades a saber: 1) "Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. (...)"¹⁵

Del pronunciamiento, se extraen las siguientes conclusiones, el Dolo en materia fiscal hace referencia a la intención positiva de querer hacer la determinada conducta, contraria a derecho, lesiva a un determinado sujeto y represándose las consecuencias de sus actos.

Y por Culpa Grave en materia fiscal se debe hacer una remisión a los criterios del código civil, para definir la culpa, que ha de ser entendida como el sujeto que maneja sus negocios de manera negligente, aún peor que las personas más imprudentes en sus negocios propios y la equiparan en sus efectos al dolo.

Es importante anotar que en materia fiscal la modalidad de culpa leve y levísima, no es constitutiva de responsabilidad fiscal, como lo expreso la Corte Constitucional en sentencia C-619 de 2002, que declaro inexecutable el párrafo segundo del artículo 4 de la ley 610 de 2000, que consagraba desde la modalidad de culpa leve para endilgar y declarar la responsabilidad fiscal.

¹⁵ Corte Constitucional, Sentencia C-840 de 2001, MP. Jaime Araujo Rentería.

"la responsabilidad fiscal es la que se deriva de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, es de naturaleza administrativa y patrimonial en cuanto busca la reparación del daño causado por la gestión fiscal irregular y es de carácter independiente y autónomo.

(...)

El propio constituyente se ha ocupado de incorporar al ordenamiento constitucional valores, principios, reglas, postulados y presupuestos -de contenido sustancial y procedimental-, que se proyectan sobre el conjunto de los derechos fundamentales y comportan una garantía para el ejercicio legítimo de los mismos, el margen de autonomía o discrecionalidad reconocida al legislador (...) no es del todo absoluto pues se encuentra limitada y subordinada a los mandatos que en esa materia emergen de la propia Carta Política." (...) determinado la naturaleza de la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales en otros supuestos. Eso es así, si se repara en el hecho de que la ley no puede concebir un sistema de responsabilidad, como lo es el fiscal, rompiendo la relación de equilibrio que debe existir con aquellos regímenes de responsabilidad cuyos elementos axiológicos han sido señalados y descritos por el constituyente, para el caso, en el inciso 2° del artículo 90 de la Carta. Ello, en el entendido que, (...) la responsabilidad fiscal es tan sólo una "especie de la responsabilidad que en general se puede exigir a los servidores públicos o a quienes desempeñen funciones públicas, por los actos que lesionan el servicio o el patrimonio público."

Y es precisamente en ese punto en donde resalta la contrariedad de las expresiones acusadas con el Texto Superior, toda vez que ellas establecen un régimen para la responsabilidad fiscal mucho más estricto que el configurado por el constituyente para la responsabilidad patrimonial que se efectiviza a través de la acción de repetición (C.P. art. 90-2), pues en tanto que esta última remite al dolo o a la culpa grave del actor, en aquella el legislador desborda ese ámbito de responsabilidad y remite a la culpa leve. (...) Para la corte ese tratamiento vulnera el artículo 13 de la Carta pues configura un régimen de responsabilidad patrimonial en el ámbito fiscal que parte de un fundamento diferente y mucho más gravoso que el previsto por el constituyente para la responsabilidad patrimonial que se efectiviza a través de la acción de repetición. Esos dos regímenes de responsabilidad deben partir de un fundamento de imputación proporcional pues, al fin de cuentas, de lo que se trata es de resarcir el daño causado al Estado.

(...)

Es cierto que quienes cumplen gestión fiscal manejan directamente recursos estatales, que por ello les asiste el deber de orientar esos recursos a la realización de las finalidades que le incumben al Estado y que el incumplimiento de ese deber los hace responsables penal, disciplinaria y fiscalmente. No obstante, los agentes estatales que no cumplen gestión fiscal, si bien no manejan directamente recursos estatales, también se hallan en el deber de proceder con estricto apego al principio de legalidad que rige sus actos y por ello, al apartarse de esa directriz, pueden también incurrir en responsabilidad penal, disciplinaria y patrimonial. Si ello es así, no hay motivos para que la ley establezca un régimen de responsabilidad fiscal y patrimonial con distintos fundamentos de imputación.

(...) En este sentido, la finalidad de dichas responsabilidades coincide plenamente ya que la misma no es sancionatoria (reprimir una conducta reprochable) sino eminentemente reparatoria o resarcitoria, están determinadas por un mismo criterio normativo de imputación subjetivo que se estructura con base en el dolo y la culpa, y parten de los mismos elementos axiológicos como son el daño antijurídico sufrido por el Estado, la acción u omisión imputable al funcionario y el nexo de causalidad entre el daño y la actividad del agente. Entonces, es evidente que en el plano del derecho sustancial y a la luz del principio de igualdad material, se trata de una misma institución jurídica (...).

Así las cosas, el criterio de imputación a aplicar en el caso de la responsabilidad fiscal no puede ser mayor al que el constituyente fijó para la responsabilidad patrimonial del funcionario frente al Estado, pues se estaría aplicando un trato diferencial de imputación por el solo hecho de que a la declaración de responsabilidad se accede por distinta vía.
(...)

En esta medida, el grado de culpa leve a que hacen referencia expresa los artículos 4° parágrafo 2° y 53 de la Ley 610 de 2000 es inconstitucional y será declarado inexecutable en la parte resolutive de esta Sentencia."¹⁶

No cabe duda de que, el elemento de la conducta ha de ser calificado con la modalidad de culpa grave o dolo, además de que el sujeto tiene que tener la calidad de gestor fiscal y de no estar acreditados suficientemente los anteriores fundamentos, por parte del despacho, no se puede articular el elemento conducta dolosa o gravemente culposa por parte del gestor fiscal y como consecuencia no se puede endilgar responsabilidad fiscal.

¹⁶ Corte Constitucional, Sentencia C-619 de 2002, Magistrados Ponentes: Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil.

C. NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE EL DAÑO Y LA CONDUCTA.

Como ultimo elemento de la responsabilidad fiscal se encuentra el nexo de causalidad entre la conducta y daño al patrimonio público, que ha de entenderse como la conexión necesaria entre la causa y el efecto producido, que en caso concreto hace referencia a la conducta como la causa y el daño como el resultado.

El Consejo de Estado por su parte ha establecido, que el nexo en materia de responsabilidad fiscal ha de ser interpretado en los siguientes términos:

“ Respecto del nexo causal entre la conducta y el daño, debe existir certeza de la relación que existe entre un hecho antecedente y un resultado, de forma tal que de no existir o haberse presentado aquella, tampoco se hubiese ocasionado este.

(....)

Sobre el nexo de causalidad se han expuesto dos teorías: la equivalencia de las condiciones que señala que todas las causas que contribuyen en la producción de un daño se consideran jurídicamente causantes del mismo, teoría que fue desplazada por la de causalidad adecuada, en la cual el daño se tiene causado por el hecho o fenómeno que normalmente ha debido producirlo. Dicho de otro modo, la primera teoría refiere a que todas las situaciones que anteceden a un resultado tienen la misma incidencia en su producción y, en consecuencia, todas son jurídicamente relevantes, pues “partiendo de un concepto de causalidad natural, todas las condiciones del resultado tienen idéntica y equivalente calidad causal”. Y sobre la teoría de la causalidad adecuada la acción o la omisión que causa un resultado es aquella que normalmente lo produce. De estas teorías en materia de responsabilidad extracontractual se aplica la de causalidad adecuada, porque surge como un correctivo de la teoría de la equivalencia de las condiciones, para evitar la extensión de la cadena causal hasta el infinito [...]”.

“[...] En orden a establecer el nexo de causalidad entre la falla del servicio y el daño, la jurisprudencia de esta Corporación acoge la teoría de la causa adecuada, según la cual la conducta u omisión de la administración debe ser relevante y eficaz para producir el resultado dañino, siendo este último una consecuencia normal y previsible. Por tanto, no es suficiente que un evento haya sumado en la producción del daño, sino que debe tratarse de un hecho determinante y adecuado para causarlo [...]”.

La teoría de la causalidad adecuada señala que será el hecho eficiente y determinante para la producción del daño el que habrá de tenerse en cuenta para imputar la responsabilidad, es decir, el que resulte idóneo para su configuración.

(...) la Sala advierte que solo es posible atribuir un resultado dañoso a quien ha ejecutado una acción u omisión que se erige como la causa idónea y eficiente para la producción del daño.”¹⁷

Obsérvese como la jurisprudencia ha decantado, el nexo de causalidad en materia fiscal, desde una óptica de causalidad adecuada, que implica que el hecho o situación que tuvo como resultado el daño, ha de ser idóneo para su configuración, por lo tanto si el daño se produce por un hecho, independiente al hecho que se acusa como su generador o por otra conducta, no se puede hablar de causalidad adecuada, ni mucho menos de nexo causal y si se desvanece este elemento no habría lugar a la responsabilidad fiscal.

Por lo tanto, será necesario que éste debidamente acreditado por el despacho que la conducta gravemente culposa o dolosa del gestor fiscal tenga idoneidad y eficiencia para producir el daño al patrimonio público.

En este orden de ideas para mejor comprensión, de lo antes dicho, se expone el criterio de la doctrina en materia de responsabilidad fiscal, que ha desarrollado el tema en los siguientes términos:

“.... El nexo causal es la relación directa que debe existir entre la conducta y el daño, siendo el daño la consecuencia del actuar doloso o gravemente culposos del gestor fiscal, de tal forma que si se demuestra que fue “otra conducta o hecho” la que lo determino el daño, allí se presenta la denominada ruptura del nexo causal....

(...)

No hay duda entonces que la demostración del daño y la conducta del gestor fiscal requiere un despliegue probatorio objetivo y concreto”¹⁸

En este orden de ideas habiendo ya agotado todas las consideraciones tendientes a estudiar los elementos de la responsabilidad fiscal, procedo a exponer el caso en concreto y las razones del porque no configuraron los elementos de la

¹⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Radicado numero: 50001-23-33-000-2015-00091-01A, CP. Hernando Sánchez Sánchez.

¹⁸ Duque Botero Luz Jimena y Fredy Céspedes Villa, El control y la responsabilidad fiscales: fundamentos sobre la vigilancia de la gestión fiscal, el proceso ordinario y el proceso verbal de responsabilidad fiscal, Editorial Ibáñez, 2018, paginas 468 y 469.

responsabilidad fiscal, atendiendo a que para la época existía una excesiva carga laboral que genera que no se configure el elemento subjetivo de la responsabilidad fiscal, veamos:

Respecto al debido seguimiento se hacen consideraciones relacionadas con las funciones inherentes al cargo que ostentaba Julio Zuleta, éste tenía una sobre carga laboral.

1. Debía atender los conflictos sociales en torno a los impactos generados por:
 - 11 Campos de producción.
 - 1621 pozos activos que sumaban a la meta de producción más de 320kbped,
 - 2 plantas térmicas de energía,
 - 3 sistemas de transporte de crudo,
 - 4 bloques exploratorios.
2. El cumplimiento de planes de gestión del entorno y de relacionamiento con los grupos de interés, representados en:
 - 4 Gobernaciones,
 - 20 de los 29 Alcaldes del Meta,
 - 10 de los 19 de Casanare,
 - 6 de los 7 de Arauca y 4 del Vichada,
 - Media docena de Universidades, 4 Cámaras de Comercio,
 - Dos corporaciones autónomas regionales (Corporinoquia y Cormacarena),
 - al menos 50 aliados entre ONG y entidades regionales,
3. Extensas reuniones sistemáticas con cada una de las 13 gerencias de proyectos de Ecopetrol en la jurisdicción de la compañía en las cuales se definían estrategias para asegurar el entorno, gestionar los riesgos e impactos de las operaciones y evitar que las alarmas se materializaran en afectaciones a los procesos de producción,
4. Reuniones sistemáticas con las áreas operativas transversales y con el equipo social,
5. El monitoreo permanente de alarmas e incidentes de entorno que para solo para el Meta, se presentaban en 20 municipios y 199 veredas,
6. La atención de paros y bloqueos propios y el acompañamiento de un socio (Pacific) y tres filiales (Hocol, ODL, Bioenergy), apoyo permanente para lograr las socializaciones y puestas en marcha de contratos de la operación incluida la gestión de mano de obra calificada y no calificada para dar cumplimiento a las directrices de Responsabilidad Socio Empresarial para

contratar mano de obra local en las casi 10.000 plazas que se ofertaban para la época,

7. El cumplimiento de los planes ambientales y sociales de las actividades de la regional,
8. El apoyo a la promoción de proveedores locales para la contratación directa de bienes y servicios por más de \$100mil millones anuales,
9. La solución a requerimientos del cliente interno y externo,
10. La atención de pQRS, tutelas y derechos de petición,
11. La atención a los compromisos para gestionar, planear y formalizar los planes de inversión social, para materializar los proyectos de educación y cultura, desarrollo territorial y ciudadanía y democracia que para la época de los hechos eran el pilar de tales inversiones.
12. Y más de 134 convenios asignados de inversión social, lo cual de acuerdo a las certificaciones de Ecopetrol desbordaba las funciones de su cargo, implicaba una enorme responsabilidad y requería dedicación exclusiva.

De la conducta dolosa o gravemente culposa del gestor fiscal.

Se le imputa la supuesta conducta a título de CULPA GRAVE al señor **JULIO ZULETA FUENTES** en su condición de GESTOR TECNICO, se le endilga la culpa grave con fundamento en NO MANEJAR LOS NEGOCIOS AJENOS CON AQUEL CUIDADO QUE LAS PERSONAS NEGLIGENTE O DE POCA PRUDENCIA SUELEN EMPLEAR EN SUS NEGOCIOS, sin embargo no desarrolla porque Julio Zuleta se le especifica dicha situación, implicando así que exista una nulidad del pliego de cargos, porque no se desarrollo en debida forma este ítem de la responsabilidad fiscal.

Lo que conlleva a una nulidad por violación al debido, de acuerdo a las causales reseñadas en el artículo 36 de la ley 610 del 2000, que dispone

“ARTICULO 36. CAUSALES DE NULIDAD. Son causales de nulidad en el proceso de responsabilidad fiscal la falta de competencia del funcionario para conocer y fallar; la violación del derecho de defensa del implicado; o la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. La nulidad será decretada por el funcionario de conocimiento del proceso.”

Así mismo la corte constitucional en su vasta jurisprudencia que ha venido analizando el proceso de responsabilidad fiscal, ha indicado.

“Por su parte, la Ley 610 de 2010 “Por medio de la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”, establece en su artículo 1° que la responsabilidad fiscal es “el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado”

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de esta normativa, dentro de los principios orientadores del proceso de responsabilidad fiscal se encuentran el debido proceso (artículo 29 Superior), los principios de la función administrativa (artículo 209 Constitucional), y los principios consagrados en el Código Contencioso Administrativo.

3.1.1.5. *De esta manera, en el trámite de la responsabilidad fiscal se deben observar las garantías sustanciales y procesales que informan el debido proceso, debidamente compatibilizadas con la naturaleza propia de las actuaciones administrativas que se rigen por reglas propias de orden constitucional y legal.(...)”¹⁹*

De lo anterior, tenemos que la ley 610 de 2000, donde se regula el proceso sancionatorio fiscal, se dejó claro que los principios orientadores serán los artículos 29 y 209 constitucionales, siendo el primero al que haremos referencia en el presente escrito, por ser el derecho fundamental al debido proceso, entendido ello como la garantía a un trámite reglado, con las formas propias de cada juicio, con un juez imparcial, con derecho a presentar pruebas y expresar argumentos para desligarse de las atribuciones que le imputan, todo ello conformando el debido proceso y al derecho de defensa.

¹⁹ Corte Constitucional, Sentencia T-738- 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

Garantía que busca limitar la arbitrariedad del estado, que no existan injusticias hacia los intervinientes procesales, sanciones injustas y sin fundamentos, es decir, la existencia del proceso donde se indicarán las formalidades, tramites y derechos de los intervinientes, al punto tal que pueda escuchare al demandado o infractor y exponer sus derechos, pruebas, sabiendo que tiene un juzgador competente e imparcial y procedimientos establecidos para su correcta defensa y juzgamiento, son la materialización del derecho de defensa y de un proceso.

En el presente caso la nulidad deviene en el hecho de que pliego de cargos resulta ser defectuoso, por el hecho de que 1 de los elementos de la responsabilidad fiscal como es la culpa en la modalidad de grave o el dolo no se encuentra plenamente acreditado en mostrado y explicado por parte del fallador sino por el contrario el fallador lo único que hizo fue indicar la normativa el Código Civil donde se establece cómo se puede llegar a tener por cierta dicha modalidad de culpa.

Sin embargo en materia de la atribución de cargos a los investigados no basta con la mera enunciación de la norma para decir que su comportamiento encaja en la misma, por el contrario de vieja data ha venido sosteniendo tanto la jurisprudencia constitucional como la jurisprudencia que rige los temas fiscales disciplinarios penales donde lo que se busca es sancionar a unos individuos o individuo por una determinada situación lesiva bien sea para el patrimonio público los deberes y acciones que se espera que se despliegue por parte del servidor público o por un ciudadano colombiano que comete una infracción en sí mismo lo que se busca es reprochar conductas que no están acorde a derecho y merecen una sanción.

Así las cosas cuando se habla de que se tiene que reprochar una conducta que no es acorde a derecho hoy la jurisprudencia constitucional y la Constitución Política de 1991 han sido claras al indicar que cuándo se pretende sancionar a un sujeto tiene que existir primero una norma anterior que consagre la conducta como sancionable en este caso reprochable. Al interior de dicha norma se establecen unos elementos que permite edificar la sanción pero ello no basta a que la mera enunciación de los elementos frente a la potencial conducta del individuo tengan implícito la sanción de manera directa.

Por el contrario requiere que el fallador haga un juicio de subsunción dónde la norma es la premisa mayor y el comportamiento junto con las pruebas la premisa menor,

de donde se arrojará como resultado la comprobación de la comisión o no de la conducta sancionable por parte del investigado, y es allí donde cobra especial relevancia la carga argumentativa ilógica que debe hacer el fallador porque dependerá de él estructurar esta subsunción dónde deberá indicar la norma que da sustento a la posible sanción y de allí empezar a desarrollar como en el caso en concreto se edifica la aplicación de dicha norma y con ello satisfacer la carga argumentativa que le corresponde.

De manera que cuando el fallador o el despacho omite dicha obligación de la carga argumentativa aparece clara y flagrantemente una violación al debido proceso en el componente del derecho a la defensa. Con fundamento en el supuesto de que el investigado cómo podrá defenderse de una situación en la cual no le explican con suficiencia por qué se le atribuye dicha norma frente a su comportamiento como se puede observar en el presente caso.

Ya que no basta con enunciar cuál es el criterio para que se tenga por cierto la existencia de la culpa grave, sino qué se debió explicar el criterio como el comportamiento de su letra fuentes constituye esa modalidad de culpa, la cual deberá edificarse en términos de tiempo modo y lugar, además de exponer si se hizo en la modalidad de acción u omisión.

Con fundamento en lo anterior presentó la nulidad del pliego de cargos que le fue endilgado a Julio César Zuleta fuentes en este momento con fundamento hoy en el supuesto de que resulta defectuoso y como está estructurado no le es posible defenderse al investigado de las acusaciones que le fueron atribuidas y con ello se viola el artículo 29 constitucional el cual deberá ser aplicado al proceso de responsabilidad.

3. De la caducidad de la acción fiscal

Respetando los juiciosos argumentos de la instancia, en el caso se dan los presupuestos dispuestos en la ley para proceder a su decreto, atendiendo a las fechas que de conformidad con los tiempos establecidos en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, no es posible que se tenga en cuenta como último acto o hecho la

caducidad de la acción contractual, toda vez que, como se expone en el Auto de Apertura el último acto o hecho cierto fue el fenecimiento de la ejecución del convenio DHS – 5211512 de 2012- el **28 de abril de 2015**, momento en el cual empezó a correr el término de caducidad de la acción fiscal, más si se tiene en cuenta que el hecho generador del presunto daño patrimonial, tenido en cuenta por su Despacho fue que en la liquidación la aseguradora solidaria de Colombia, no cubrió el 100% del valor desembolsado por concepto del adicional, hecho que se materializó al momento de afectación de las pólizas, entendiéndose entonces que el Auto de Apertura No. 054 del 19 de febrero de 2021, se profirió cinco (05) años después de la ocurrencia del hecho generador del daño patrimonial.

Sobre este particular, resulta procedente traer a coalición el concepto jurídico proferido por la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República bajo el radicado No.CGROJ- 050-2019, dentro del cual precisa sobre la caducidad de la acción fiscal que:

“En materia de responsabilidad fiscal, el artículo 9 de la Ley 610 de 2000, consagra el término al cabo del cual, de no haberse iniciado el proceso tendiente al resarcimiento del detrimento patrimonial, se habrá perdido la oportunidad de hacerlo; esto es, la caducidad de la acción fiscal. Reza la norma:

(...)

Se trata entonces de una norma procesal, que, como tal, tiene por objeto fijar un orden, unas bases, para que, en respeto a las garantías fundamentales de los asociados, el sujeto pasivo de la acción observe la existencia de un límite temporal para el ejercicio en su contra del poder estatal. No en vano se ha señalado que las normas sobre caducidad son de orden público.

De esta forma, lo reglado por la citada norma no puede dar lugar a interpretaciones, sino que debe aplicarse conforme a su tenor literal, es decir, que la contabilización del término de caducidad de la acción fiscal, debe partir de la fecha de los hechos y no del momento en el cual se tiene conocimiento de los mismos o se acredita documental o probatoriamente su consumación, pues ello extendería —sin fundamento—

el término previsto, siendo catalogado tal proceder de ilegal por apartarse del precepto normativo.

Dicho de otra manera, al realizarse el conteo del término de caducidad a partir de una fecha distinta a la ordenada por el artículo 9 de la Ley 610 de 2000, se actuaría por fuera de la norma, con lo que se desconocería el debido proceso, derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.” (Negrillas fuera de texto)

De lo anterior, se concluye que a la fecha en que el Despacho dentro del Auto de Apertura ordenó la apertura de la presente acción fiscal había operado el fenómeno de la caducidad, pues se reitera que el hecho generador del presunto daño patrimonial se materializó el 28 de abril de 2015, momento en el cual feneció el tiempo de ejecución del plazo del convenio, en tal sentido el auto de apertura de la presente acción fiscal debió ser proferido entre el 28 de abril de 2015 al 28 de abril de 2020, lo que no ocurrió para el caso concreto, como quiera que el auto de apertura se profirió un año después de cuando había operado el fenómeno de caducidad.

En tal sentido, resulta oportuno solicitar al Despacho, proceda a decretar la cesación de la acción fiscal de la referencia tras haber operado la caducidad de la misma conforme lo expuesto en párrafos anteriores, al tenor de la descrito en el artículo 16 de la ley 610 del 2000 cuyo tenor literal prescribe específicamente:

“ARTÍCULO 16. CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL. En cualquier estado de la indagación preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal, procederá el archivo del expediente cuando se establezca que la acción fiscal no podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción, cuando se demuestre que el hecho no existió o que no es constitutivo de daño patrimonial al Estado o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, o se acredite la operancia de una causal eximente de responsabilidad fiscal o aparezca demostrado que el daño investigado ha sido resarcido totalmente.”

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito al Despacho que, como quiera que los hechos objeto de reproche fiscal surgieron con el incumplimiento del Convenio, el cual se materializó una vez finalizado el plazo contractual para su ejecución el **28 de abril de 2015**, proceda con el archivo y cesación de la acción fiscal por haber operado la caducidad de la misma.

II. PETICION.

Con fundamento en los argumentos ya expuestos, le solicito respetuosamente al despacho, lo siguiente:

1. Se declare la nulidad de lo actuado pues examinada la situación a la luz de la ley 610 de 2000, con fundamento en las deficiencias que presenta el auto de imputación y con ello se quebranta el derecho al debido proceso del investigado.
2. Se EXONERE de responsabilidad fiscal al señor JULIO CESAR ZULETA FUENTES
3. Como consecuencia de lo anterior, se ARCHIVE el presente proceso de responsabilidad fiscal.

III. PRUEBAS.

Con el propósito de demostrar la ausencia de responsabilidad fiscal y que la conducta del señor Julio César Zuleta Fuentes, estuvo carente de la culpabilidad endilgada en el pliego de cargos, respetuosamente solicito la práctica de las siguientes pruebas:

- a. De carácter testimonial.

Se escuche en declaración a los señores WILSON YOVANNI DE LA CRUZ, RUBIELA BARAJAS LEGUIZAMO, MARTHA JANETH CARDENAS, YALITZA

MARGARITA SIERRA, JACQUELINE CORREA, NUBIA CRISTINA RIAÑO, todos ellos funcionarios de ECOPETROL, que pueden ser localizados en el Piso 6 del Centro Comercial La Primavera Urbana, para que depongan respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó la suscripción del convenio objeto de estas diligencias, así como respecto de la sobrecarga laboral en que se veía expuesto un gestor de convenios en Ecopetrol y podrán informar al despacho si un gestor técnico tiene facultad decisoria en el manejo de los recursos de Ecopetrol en el marco de un convenio; podrán igualmente informar al despacho respecto de las figuras de las Gestorías Técnicas contratadas para hacerle seguimiento a los convenios y demás hechos de interés comunes del proceso.

b. De carácter documental.

Se oficie ECOPETROL S.A., para que allegue copia de los siguientes documentos:

- La descripción del cargo desempeñado por el señor JULIO CESAR ZULETA FUENTES, para la época de los hechos
- De todos los convenios y/o contratos que estuvieron bajo la responsabilidad del señor JULIO CESAR ZULETA FUENTES durante el período de los hechos y se determine qué otras funciones cumplía en ECOPETROL S.A..
- De todas las actuaciones realizadas por JULIO CESAR ZULETA FUENTES en relación a su función como GESTOR TÉCNICO del convenio objeto de las diligencias.
- Solicite información a la oficina de servicios compartidos de ECOPETROL S.A., para que indique al despacho, si en desarrollo de la GESTORIA TECNICA se tenía apoyo para su realización con trabajadores externos o de ECOPETROL, de diferentes profesiones a la del ingeniero Zuleta Fuentes.

- Se allegue Copia del Plan de Inversión social regional, junto con la socialización al gestor técnico del convenio.
- Se oficie a Servicios compartidos de ECOPETROL, para que allegue las designaciones realizadas a JULIO CESAR ZULETA FUENTES, como gestor y administrador y las sábanas de contratos y convenios, como informe mensual, que para esa época se suministraba.
- A la maestra de datos de ECOPETROL, para que:
 - Remita las descripción del cargo desempeñado por el señor JULIO CESAR ZULETA FUENTES durante el periodo de los hechos.
 - Informe si durante dicho periodo tuvo situaciones administrativas tales como encargos, licencias, permisos, vacaciones, entre otras.
 - Si durante dicho periodo existieron otros funcionarios encargados de las funciones de su profesión en el entorno y, en caso de ser positiva la afirmación, indiquen las fechas de sus nombramientos junto con su comienzo de funciones.
 - Se oficie la oficina de Servicios Compartidos, a través de la herramienta SAP y/o a la que corresponda actualmente, para que remita copia de los siguientes documentos:
 - Del cronograma de actividades desarrollado durante el periodo en que fue administrador del convenio junto con el plan de trabajo y los informes rendidos a las diferentes dependencias.
 - De todos los convenios y/o contratos que estuvieron bajo la responsabilidad del señor JULIO CESAR ZULETA FUENTES, durante el periodo de gestor técnico del convenio.
 - De las reuniones a las que asistió el señor JULIO CESAR ZULETA FUENTES, dentro de su sede de trabajo junto con las que se desplegaban en otras gerencias durante el periodo en que fue gestor técnico del convenio.
 - Remitan copia de todos los comités de seguimiento y control que asistió JULIO CESAR ZULETA FUENTES, como gestor técnico del convenio objeto de las diligencias.

- Se oficie a la sección de convenios y contratos de ECOPETROL, para que allegue la documentación entregada por la gestoría administrativa contratada -COPCO y PSP- en desarrollo de la contratación del convenio objeto de las diligencias junto con los informes rendidos por el funcionario autorizado.
- Se oficie al área jurídica de ECOPETROL, para que se explique el porque no se realizó el cobro al ejecutor vía acción ejecutiva una vez liquidado el mismo.
- Se oficie a talento humano de ECOPETROL, para que allegue las guías vigentes que les permitía a los administradores y/o gestores técnicos terminar y liquidar los convenios.
- Se oficie al área jurídica de ECOPETROL, para que informe que empresa fue contratada y era la encargada de realizar la gestoría administrativa del convenio objeto de las diligencias.

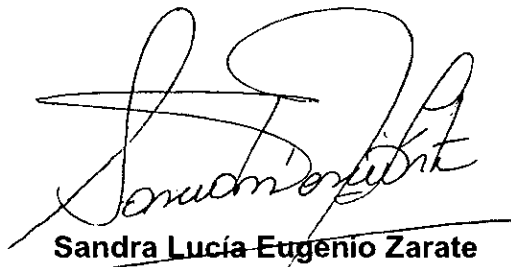
Las demás que, a juicio del Despacho, sean conducentes para el esclarecimiento de los hechos.

-Así mismo le solicito que se sirva señalar fecha y hora para que mi mandante sea escuchado en versión libre, atendiendo a que es un derecho que le asiste al investigado.

IV. NOTIFICACIONES

Recibo notificaciones de manera presencial en el Edificio Comité de Ganaderos, oficina 803 en la ciudad de Villavicencio departamento del Meta y por correo electrónico sandraluciaeugeniozarateslez@gmail.com.

Atentamente,


Sandra Lucía Eugenio Zarate